

Participaron partidos y movimientos sociales

Una manifestación por un hospital cien por cien público recorrió las calles del barrio

► Más de cien personas se manifestaron el pasado 10 de noviembre para exigir al Gobierno regional una sanidad cien por cien pública para el futuro hospital de Toledo, secundando el llamamiento de diversos partidos políticos y movimientos sociales de la ciudad, como la Plataforma por una Sanidad Pública. Organizada por IU, la reivindicación de la sanidad pública vuelve a estar en primer plano de la actualidad pública ante la cercanía de la puesta en funcionamiento del hospital, en el que la Junta ha previsto que algunos de los servicios sean privatizados, lo que supondrá un gasto anual de 60 millones de euros aproximadamente a las arcas públicas.

Vecinos

Mario García, coordinador provincial de IU señaló que «no queremos un servicio mercantilizado» y que «la sanidad debe ser pública» y lanzó un mensaje al Gobierno de Page y al resto de partidos dejando claro que los castellano-manchegos no quieren «un modelo privatizador liberal al que nos están abocando».

Por su parte, la responsable de estrategias para conflictos de IU, Olga Ávalos, afirmó que ha

llegado el momento de definir el modelo hospitalario para Toledo, «ya que los presupuestos están encima de la mesa y la sanidad tiene que llegar a todos los ciudadanos». En este caso, matizó, que «los recortes» del anterior Gobierno regional dejaron la sanidad muy mermada», pero desde IU no quieren que pueda volver a repetirse.

También criticó la tardanza en la puesta en marcha del hospital, y, sobre todo, se refirió «a



La manifestación terminó concentrándose delante de las obras del hospital.

las veces que lo ha inaugurado Page ya». Los manifestantes recordaron también el problema del amianto en el barrio para exigir soluciones.

Pedro López, de la Federación de Sanidad de CCOO, añadió que los sindicatos cuentan con un fallo judicial que se ganó al gobierno de Cospedal «que deja claro que no se puede privatizar ningún servicio ni sanitario ni de gestión» en el hospital. Por tanto, en CCOO no descartan tener que echar mano de la

sentencia y acudir a los tribunales si no se cumple.

Finalmente, José María Potenciano, del Sindicato Independiente de Celadores (SIG-CS), señaló que aún están esperando la respuesta de la administración regional «sobre la información del nuevo contrato con las empresas adjudicatarias y los servicios». De momento, espera «que cumpla con su palabra».

► Las privatizaciones del nuevo hospital pueden costar 60 millones anuales

► Los convocantes no quieren un modelo privatizador liberal al que nos están abocando

Debía incluir la ronda Este y el túnel para ambulancias hasta Urgencias

El Ayuntamiento supeditó en 2012 la licencia del nuevo hospital a un Plan de Tráfico

Hace ahora cinco años, el 12 de noviembre de 2012, el entonces concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Rafael Perezagua, señaló en el pleno municipal que se había reunido con la Junta para comunicarle que la licencia de funcionamiento del nuevo hospital se supeditará a un Plan de Tráfico, porque «sin un riguroso estudio el Ayuntamiento no está dispuesto a concederla». Y cinco años después, seguimos sin tener ese estudio, a pesar de que la fecha de apertura del centro hospitalario se acerca cada vez más.

Perezagua, explicó entonces que la idea de unir la circunvalación a Toledo y la autovía de los Viñedos

con el Polígono y con la A-40 -en el marco de la movilidad del nuevo hospital- «se guardó en un cajón» y el túnel exclusivo de acceso al futuro centro hospitalario «ha quedado suprimido».

El concejal se solidarizó con las asociaciones vecinales y sus temores sobre el futuro colapso de la entrada al Polígono y, por ello, recomendó a la Junta que «tome buena nota» del anterior Plan de Tráfico, que incluía la ronda Este y el túnel de acceso al hospital, cuando elaborara el estudio. Ahora, parece que sus recomendaciones han caído definitivamente en saco roto y ambos proyectos están olvidados.

Manifiesto de IU por la Sanidad Pública

Derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Izquierda Unida defiende sin fisuras un sistema sanitario público universal, equitativo, de calidad y sostenible. Entendemos la Salud como derecho social fundamental que va más allá de la ausencia de enfermedad y se considera «un estado completo de bienestar físico, mental y social». Por lo que defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía. Queremos un sistema sanitario que tenga como objetivo garantizar el bienestar de las personas.

Desde el año 2011 en que llegó al poder de nuestra región el Partido Popular de María Dolores de Cospedal, comenzó una sistemática aplicación de recortes presupuestarios que estragó la disponibilidad de recursos para la sanidad pública po-

niendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía. El conjunto de medidas desarrolladas en los años del Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, contribuyeron al desmantelamiento del sistema sanitario público nos llevó a una situación negativa para la salud, la equidad y la cohesión de la sociedad.

El Gobierno del PP contribuyó al desmantelamiento del sistema sanitario público y a una situación negativa para la salud

Tras el cambio de gobierno en nuestra región y diversos acontecimientos con el contrato de la construcción del hospital de Toledo que paralizó durante mucho tiempo su construcción, el nuevo gobierno regional decide acometer las obras y optar por el mismo modelo del Par-

tido Popular: la UTE Nuevo Hospital de Toledo S.A., integrada por las constructoras Acciona Concesiones, OHL y Concesiones Viarias Dos; se encargaría de terminar la construcción del edificio del nuevo hospital, a cambio de que estas empresas gestionen durante 30 años los servicios no clínicos o sanitarios del hospital.

La obra costará algo más de 250 millones de euros, mientras que las empresas por la gestión de esos servicios recibirán un canon fijo y otro variable por un importe total de 60 millones de euros, es decir, recibirán en los 30 años de concesión: cerca de 1.800 millones de euros.

El gobierno regional se ha olvidado de los compromisos de Sanidad Pública que firmaba en los días previos a las elecciones de 2015 y se ha puesto al servicio del beneficio empresarial, a cambio de una obra civil, necesaria, pero que no garantizará el derecho universal al acceso a la sanidad pública.